

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, septiembre 23 de 2020

Radicado: 05001-31-05-**003-2008-01122- 03**
Demandante: MARY LUZ MONTOYA UPEGUI Y SANDRA PATRICIA
MONTOYA CARMONA
Demandado: COLPENSIONES
Litis consorte necesarios
por pasiva: GISELA, CAROLINA, SERGIO LEÓN Y JORGE ELIECER
CÓRDOBA MONTOYA
Asunto: APELACIÓN CONTRA SENTENCIA
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

La sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARY LUZ MONTOYA UPEGUI Y SANDRA PATRICIA MONTOYA CARMONA, en contra de COLPENSIONES y siendo vinculados por pasiva a GISELA, CAROLINA, SERGIO LEÓN Y JORGE ELIECER CÓRDOBA MONTOYA.

Decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

Atendiendo al contenido de la escritura pública 3378 de septiembre 2 de 2019 suscrita ante el Notario 9 de Bogotá, por la cual la administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones otorga poder a la sociedad ABACO ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.S. para ejercer la defensa judicial de la entidad, se le reconoce personería adjetiva a la Dra. Edith Maritza Quintero Montoya, conforme a la sustitución al poder que se allegó al proceso, quedando así la doctora Quintero Montoya investida de todas las facultades que confirió la entidad poderdante.

ANTECEDENTES

El A quo, luego de valorado el material probatorio estableció que no se satisfizo el requisito de convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes, toda vez que los dichos de los testigos fueron contradictorios y por tanto insuficientes para establecer las premisas fácticas de la prestación reclamada. Indicó que el derecho pensional habría de concederse en un 100% a Jorge Eliecer Córdoba Montoya.

La decisión fue recurrida así:

La apoderada de la demandante insistió en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de Mary Luz Montoya indicando que, si bien el afiliado fallecido en los 6 meses anteriores a su muerte vivió en casa de la madre, también es cierto que allí convivía con su compañera permanente, quien trabajaba en otro municipio – Bello - y por tanto en ocasiones se ausentaba del hogar. Señaló que de cara a los testimonios se estableció que esta pareja se proporcionaba acompañamiento y ayuda mutua, que Mary Luz laboraba para asumir los gastos del hogar, esto cuando Sergio estaba enfermo y solo recibía los auxilios por incapacidad.

Resalta que los dichos de los testigos son difusos dado al paso del tiempo, pues han sido más de 10 años, lo que afecta la exactitud de los mismos. Señaló que hay lugar al pago de los intereses de mora, ya que la accionante acreditó el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación.

ALEGATOS

Concedido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la accionante insiste en la procedencia de la pensión de sobrevivientes, expresando que debe efectuarse una valoración de la prueba testimonial con la cual se demostró el requisito de convivencia.

Pese a recibirse sendos escritos de la accionada Colpensiones y de la curadora de los litisconsortes por pasiva presentando alegatos de conclusión, los mismo no se valorarán en tanto fueron extemporáneos.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver los aspectos objeto de apelación encuentra la Sala pertinente expresar que en el presente evento se encuentran por fuera de discusión que: *i)* Con ocasión del fallecimiento de Sergio León Córdoba, ocurrido el 14 de septiembre de 2005 (fl. 146) el extinto ISS reconoció la pensión de sobrevivientes a sus hijos Gisela, Carolina, Sergio León y Jorge Eliecer Córdoba Montoya a quienes se les concedió el 100% de la prestación divida en partes iguales (resolución 5818 de 2007 fls. 6/10); *ii)* Que en la misma resolución el ISS negó el derecho pensional a las señoras Sandra Patricia Montoya Carmona y Mary Luz Montoya Upegui, argumentando que estas no acreditaron una convivencia efectiva con el causante hasta el momento de su fallecimiento (fls. 6/10); *iii)* Que los beneficiarios Guisela, Carolina y Sergio León Córdoba Montoya son hijos del causante y Sandra Patricia Montoya Carmona. Por su parte, Jorge Eliecer Córdoba Montoya es hijo del causante y Mary Luz Montoya Upegui así se indica en la resolución 5818 de 2017 – fl. 60/64 y se conforma con el registro civil de nacimiento de Jorge Eliecer Córdoba fl. 314, *iv)* El 12 de febrero de 2008 falleció Sandra Patricia Montoya Carmona, quien se anunció como cónyuge del afiliado (fl. 5), *v)* Que desde el auto admisorio de la demanda proferido el 9 de marzo de 2008 se dispuso aplicar las premisas del artículo 34 del Decreto 758 de 1990, referente a la suspensión del trámite de la prestación en atención al conflicto entre posibles beneficiarios (fls. 14/15), *vi)* En providencia del 30 de noviembre de 2010 el Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Medellín condenó al ISS a reconocer la pensión de

sobrevivientes en favor de la compañera permanente Mary Luz Montoya Upegui (fl. 67/73), la misma fue dejada sin efectos por el superior funcional, argumentado la violación al debido proceso por falta de integración al trámite de los actuales beneficiarios de la prestación (fls. 115/119), **vii)** Que tras múltiples actuaciones se integró la litis así: por activa con la demandante Mary Luz Montoya Upegui, como interviniente ad excludendum a Sandra Patricia Montoya Carmona, representada por curador para la litis (fl. 26/27) y por pasiva contra Colpensiones y como litis consortes necesarios por pasiva a Gisela, Carolina, Sergio León y Jorge Eliecer Córdoba Montoya representados por curador para la litis. fls. 214/215 y 278/280)

En este orden de ideas, en virtud del principio de consonancia y el grado de consulta, le corresponde a esta Corporación determinar si es procedente ordenar que la prestación de sobreviviente que fuera reconocida a Gisela, Carolina, Sergio León y Jorge Eliecer Córdoba Montoya, sea compartida con las demandantes, en caso positivo, su proporción y fecha de disfrute.

Pues bien, como punto de partida y dada la fecha de fallecimiento del señor **Sergio León Córdoba Cataño** el 14 de septiembre de 2005, debe acudirse a la norma que regula el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, esto es la Ley 797 de 2003, que en su artículo 13 literales a y b, establecen la calidad de beneficiarios (as) del cónyuge y compañero (a) permanente, quienes a quienes se les exige que demuestren convivencia con el causante y bajo esta premisa podrán reclamar una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, en un porcentaje en proporción al tiempo convivido con el causante. .

Sobre la hermenéutica de esta norma, parte esta corporación de la premisa que la pensión de sobrevivientes tiene como propósito brindar un marco de protección al grupo familiar del afiliado o del pensionado que fallece, compensando económicamente todos aquellos daños que su muerte causa. Se busca pues que los beneficiarios mantengan

un grado de seguridad social y económica del que gozaban mientras vivía el pensionado o el afiliado (C-1176 de 2001).

En relación a la pensión para los cónyuges y compañeros permanentes, se debe tener presente que la condición fundante de la calidad de beneficiario es la efectiva convivencia, la decisión de formar un hogar, las actuaciones que den cuenta de la intención de seguir un rumbo común, la constante y permanente ayuda y socorro mutua, la solidaridad, y acompañamiento, por lo que se excluyen los encuentros ocasionales, fortuitos o esporádicos.

En igual forma se ha indicado que para los eventos de compañeros permanentes, tal calidad ha de mantenerse hasta el momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, pues al tratarse de una situación fáctica, al romperse la convivencia, con los elementos ya expuestos, la condición de compañeros permanentes también desaparece e impide el reconocimiento de los derechos pensionales. (SL 1399 de 2018, SL 4525 de 2019, entre otros)

Ahora bien, relativo a la temporalidad de dicha convivencia, acoge esta Corporación el criterio vertido en sentencia SL 1730 de junio 3 de 2020 donde la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia rectifica la interpretación que se venía dando al artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para indicar que el plazo de 5 años de convivencia sólo es exigible cuando se pretenda la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de un pensionado, tanto para cónyuge o como compañero (a) permanente.

En la mencionada providencia, aclaró la máxima corporación que desde la incorporación de tal requisito se pretendió desestimar las uniones fraudulentas, proteger a los verdaderos beneficiarios de reclamaciones artificiosas y contener conductas dirigidas a la obtención injustificada de beneficios económicos del sistema, es por ello que se presenta mayor exigencia para acceder a una sustitución pensional (por muerte de pensionado), requisito que no se hace extensible respecto de los afiliados cotizantes,

quienes previo a su muerte no tenían ninguna situación consolidada; al respecto indicó la Corte:

“Y es que, de la redacción del precepto legal, se itera, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado; una intelección distinta, comporta la variación de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinción, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada...”

Y concluye la alta corporación:

“Con lo anterior, la Sala fija el verdadero alcance de la disposición acusada, a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, in dubio pro operario, esto es, que la convivencia mínima de cinco (5) años, en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado”.

Por otro lado, en cuanto al acceso a la prestación cuando quien la pretenda es un cónyuge separado de hecho que conserve el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal vigente, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral enfatizó que basta con acreditar que existió la predicada convivencia, permeada por lazos de comunicación, solidaria y ayuda mutua por al menos 5 años, sin que deban corresponder al momento inmediatamente anterior al fallecimiento del afiliado o pensionado, interpretación que además de ser fiel al contenido de la norma, respeta su espíritu y el principio de solidaridad, protegiendo a quien dentro del matrimonio contribuyó a la construcción del beneficio pensional del causante. (al respecto la sentencia SL 5169 de 2019 que reitera la sentencias CSJ SL 41637 de 2012, CSJ SL7299 de 2015, CSJ SL6519-2017, entre otras)

Puntualizó la Corte que no es dable exigir que la convivencia, ni los lazos de solidaridad perduren hasta el momento del fallecimiento, pues ello equivaldría a hacer nugatorio el derecho pensional del cónyuge, además de desconocer las diferentes situaciones personales que llevan al distanciamiento de la pareja.

En resumen y para lo que interesa a este asunto, tendrá derecho a la pensión de sobreviviente el cónyuge con unión marital vigente, separado o no de hecho, que haya convivido en cualquier tiempo con el afiliado fallecido. Igual derecho tendrá el compañero permanente que acredite que hizo vida marital con el afiliado fallecido hasta el momento de su fallecimiento.

Partiendo de la premisa antes expuesta, serán analizadas las pretensiones, iniciando con las de la interviniente ad excludendum Sandra Patricia Montoya Carmona.

Sea lo primero indicar que en los términos del artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente para el momento en que se adelantó el trámite, como en el artículo 63 del Código General del proceso, la figura de la intervención ad excludendum comporta una vinculación voluntaria al proceso, siendo el tercero quien aludiendo tener interés sobre los derechos discutidos, se presenta al proceso presentando su propia pretensión.

En esta línea, la Sala de Casación Laboral de la C.S.J ha indicado: *“...entre posibles beneficiarios de una pensión de sobrevivientes, verbi gracia entre cónyuge y compañera(o) permanente, no es posible predicar un litis consorcio necesario, pues la resolución de la controversia judicial puede darse en favor de una de ellas sin que sea necesario la comparecencia de la otra, pues el eventual mejor derecho de la última puede ser objeto de declaración en otro juicio”* Sentencia SL 16855 de 2015

Bajo esta premisa no resulta acertado indicar que la vinculación de Sandra Patricia Montoya resultare necesaria para trabar la litis, ni mucho menos obligatoria para adelantar el trámite, en tanto con ella no se conformaba un litis consorcio necesario. Ahora su participación en el litigio era posible a través de la intervención ad excludendum, pero ello comportaba un acto voluntario del titular del derecho, lo que lleva a que también el nombramiento del curador para la litis resulte inadecuado, consideración que expresó el profesional del derecho nombrado para representar los

intereses de Sandra Patricia Montoya Carmona, quien se abstuvo de presentar demanda (fls. 26/27 y 31).

Así las cosas, no existe pretensión que respecto a la finada Sandra Patricia Montoya Carmona deba resolverse ya que no presentó demanda, ni es del resorte de esta corporación entrar a resolver asuntos que no han sido debatido, no se ejerció el derecho de defensa, ni existe prueba alguna que lo soporte.

En lo atinente a la pretensión de la demandante Mary Luz Montoya Upegui se cuenta con la prueba testimonial, siendo escuchadas las señoras Liliana María Montoya Upegui y Piedad Córdoba Castaño, quienes se identificaron como hermana y cuñada de la actora respectivamente y por tanto tuvieron un contacto directo con ésta y los hechos declarados.

Fue así que **Liliana María Montoya** relató que su hermana Mary Luz conoció a Sergio León Córdoba Cataño cuando este se mudó a vivir a Niquia – Bello, pues este estaba recibiendo separado de su esposa y vivía con un compañero de trabajo. Relató que Sergio y Mary Luz desde el año 2000 establecieron una relación sentimental y en poco tiempo se mudaron a la misma vivienda en Niquia, que luego de 1 ó 2 años de relación procrearon un hijo, Jorge Eliecer. Relató que en el año 2003 la pareja se mudó a la Estrella – Antioquia, allí vivieron 1 ó 1.5 años y que luego de esto se mudaron a Girardota, donde convivían con la mamá y varios familiares de Sergio León.

Indicó que Sergio León tenía una esposa, a quien nunca conoció, pero sabía que con ella procreó tres hijos, quienes visitaban frecuentemente el hogar de Mary Luz y Sergio León.

Explicó que la mudanza a Girardota fue necesaria para el cuidado de Sergio León quien padecía una enfermedad terminal, por tanto, Mary Luz debía trabajar para obtener ingresos para mantener las necesidades del hogar y en particular de la enfermedad de

Sergio León, aclarando que Mary Luz trabajaba en una fábrica de arepas en Bello, refiriendo que cuando Sergio trabajaba él cubría todas las necesidades del hogar, pero con ocasión de la enfermedad de aquel, Mary Luz asumió tal obligación.

Relató que durante la enfermedad de Sergio León, Mary Luz siempre estuvo cuidando de este, incluso el día que murió en la Clínica León XIII, estaba acompañado de Mary Luz.

Por su parte, **Piedad Córdoba Cataño**, hermana del causante, relató que Sergio León contrajo matrimonio con Sandra Patricia Montoya, con quien vivía en Girardota, que procrearon tres hijos, pero la convivencia de esta pareja terminó por infidelidad de aquella. Debido a ello Sergio se mudó a Niquia – Bello, allí conoció a Mary Luz, quien fue reconocida por toda la familia como la novia de su hermano y que al poco tiempo iniciaron una convivencia y procrearon un hijo de nombre Jorge Eliecer.

Señaló que esta pareja vivió en Niquia, luego en la Estrella y durante los últimos 3 meses de vida de Sergio León estuvieron en casa materna de aquel, donde esta testigo se encargaba del cuidado de su hermano, en tanto Mary Luz debía desplazarse hasta Bello a trabajar en una fábrica de arepas, empleo que era necesario para atender las necesidades del Sergio León, ya que por su enfermedad necesitaba una alimentación especial, además que requería acudir con frecuencia al servicio médico.

Señaló que Mary Luz también se mudó a Girardota con toda la familia de Sergio León, pero por su empleo en ocasiones pernotaba en Bello, explicó que ella iba y venía, que prácticamente vivían en las dos partes.

Aclaró que con ocasión de la muerte de Sergio León las condiciones de vida de Mary Luz desmejoraron notoriamente, no solo porque éste era su apoyo económico y del hijo que procrearon, pero además porque la demandante soporta la misma enfermedad que causó la muerte de aquel.

Adicional entre los folios 55/59 aparecen unos formularios que dan cuenta de la información recaudada por el ISS para efectos de analizar la procedencia de la pensión. Así aparece una declaración de Sandra Patricia Montoya, quien señala que convivió con el causante por 13 años y que se separaron seis meses antes de su muerte, ya que este periodo el causante vivió en casa de la madre de aquel (fls. 55/56).

Igual formulario aparece diligenciado por Mary Luz Montoya, quien se anunció como compañera permanente del causante por 5 años y hasta el momento de su fallecimiento y respecto a la dirección de convivencia con el fallecido indica: *“Av 47 a # 67-90 por la enfermedad con la mamá en Girardota”*. (fls. 57/58)

Son estas las pruebas aportadas al proceso, las que son valoradas en conjunto y de cara a las reglas de la sana crítica permite a la corporación concluir que entre los señores Sergio León Córdoba Cataño y Mary Luz Montoya Upegui existió una verdadera relación entre compañeros permanentes, que no se trató de una unión fugaz u ocasional, sino que pervivió gracias a la intención conjunta de formar un hogar y tener un rumbo común.

Para llegar a tal conclusión la Sala se vale de los dichos de Liliana María Montoya y Piedad Córdoba, quienes como familiares de la pareja y por tener contacto directo con estos durante algunos periodos, su versión merece total credibilidad al indicar que la unión de estos estuvo vigente desde el año 2000, que convivían bajo el mismo techo, que procrearon un hijo, que compartían un destino común, entre ellos existía acompañamiento económico que pervivió en momento de dificultad y enfermedad, vínculo que no se diluyó por la difícil situación de salud del afiliado, sino que por el contrario, la pareja asumió con entereza tal prueba, buscó apoyo en el núcleo familiar para atender el cuidado de Sergio León, a la vez que Mary Luz se abrogó la responsabilidad de proveer económicamente para su familia, apoyo que pervivió hasta el momento de la muerte.

Se resalta que pese a que de los dichos de los testigos se muestra que en los últimos meses de vida Sergio León Córdoba Cataño residió en casa de su madre y que en ocasiones Mary Luz no pernotaba en este hogar, tal situación no destruyó la unión de la pareja, en tanto las eventuales separaciones se hallan plenamente justificadas por

motivos de salud y de trabajo, ya que era necesario que alguien estuviera al cuidado de aquel, mientras la actora desarrollaba alguna actividad económica para atender las necesidades económicas del hogar (al respecto la sentencias SL14237-2015, rad. 45704, reiterada CSJ SL6519-2017, rad. 57055, y CSJ SL1399-2018, rad. 45779, SL 4525 de 20196, entre otras)

A diferencia de lo expresado por el A quo, para la Sala las declaraciones no resulta confusas, por el contrario sus dichos denotan espontaneidad, relatan lo que recuerdan teniendo presente que han pasado varios lustros, presentan un relato de varios eventos que muestran cómo Sergio León y Mary Luz llevaron una convivencia, un destino común por más de cinco años, que no se vio truncada por las dificultades económicas, ni los quebrantos de salud y que lucharon juntos hasta el fallecimiento de aquel.

En adición, debe tenerse presente que la prueba testimonial no se orienta a obtener un detalle pormenorizado de las actividades de la familia, día a día, sino que a través de este se busca conocer algunos rasgos de la conducta de pareja; en este sentido con los dichos de las testigos se muestra que Sergio León y Mary Luz se proyectaban ante la sociedad y sus familiares como compañeros permanentes, en una relación duradera.

En cuanto a los datos reportados en los formularios de folios 55/59 estos redundan en los dichos de los testigos respecto a la demandante Montoya Upegui, mostrando que entre ellos existió una unión como compañeros permanentes por espacio de 5 años y que al momento de la muerte del afiliado el lugar de residencia era la casa de la madre de Sergio León, situación que fue explicada por los testigos y justificada por los cuidados en la enfermedad y la actividad laboral de la demandante.

Así las cosas, será revocada la sentencia del A quo para en su lugar declarar el derecho que le asiste a Mary Luz Montoya Upegui al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente. Prestación que habrá

de compartir con los beneficiarios de la prestación Gisela, Carolina, Sergio León y Jorge Eliecer Córdoba Montoya.

Se destaca que dada la fecha de nacimiento de los hijos del causante Córdoba Cataño, a la fecha existen beneficiarios con aptitud para seguir percibiendo la prestación reconocida, así.

Beneficiario	Fecha de nacimiento	Edad actual	Aptitud para seguir disfrutando de la pensión
Jorge Eliecer Córdoba Montoya	06/03/2002 (fl. 314)	18	Si
Guisela Córdoba Montoya	02/10/1997 (fl. 60)	22	Si
Carolina Córdoba Montoya	08/10/1993 (fl. 60)	26	No
Sergio León Córdoba Montoya	02/07/1992 (fl. 60)	28	No

Producto de la solicitud del despacho, Colpensiones aportó el reporte de pagos a los antes mencionados, de donde se desprende que la prestación fue reconocida a los 4 beneficiarios enunciados hasta julio de 2010, momento en que se suspendió la proporción de Sergio León Córdoba, sin embargo, la cesación del pago no implicó el acrecimiento automático en favor de los demás beneficiarios, la que solo se produjo a partir de abril de 2011 cuando el valor total de la mesada se dividió en tres porciones.

A su vez, el derecho en favor de Carolina Córdoba Montoya se suspendió en el mes de noviembre de 2011, cuando arribó a los 18 años de edad, pero tampoco implicó el acrecimiento automático en favor de los restantes beneficiarios, el que se hizo efectivo a partir de julio de 2012, cuando el 100% de la mesada se dividió en partes iguales para Gisela y Jorge Eliecer Córdoba Montoya.

Llegado el mes de noviembre de 2015, cuando Gisela Córdoba arribó a la mayoría de edad, Colpensiones suspendió el pago de su mesada, sin embargo, ello no generó el acrecimiento en favor del último beneficiario, Jorge Eliecer Córdoba, a quien se le

continuó pagando el 50% de la mesada, por lo menos hasta noviembre de 2017 como se informa en el certificado de fecha 13 de diciembre de 2017 (fls 321/330).

Se precisa que en cabeza de los hijos del causante no existe obligación de reintegrar a Colpensiones o de pagar en favor de Mary Luz Montoya Upegui suma alguna, pues pese a que en resolución 5818 de 2007 la mesada se reconoció en un 100%, tal pago desconoció que conforme al artículo 34 del Decreto 758 de 1990, cuando se presenta controversia entre posibles beneficiarios se debe suspender el trámite de la prestación, hasta que a través de sentencia ejecutoriada se decida a quien o quienes corresponde el derecho (al respecto la sentencia SL 1436 de 2020).

Se resalta que la accionada al tener conocimiento de la existencia de múltiples reclamante sobre la misma prestación, tenía el deber de dejar en suspenso la porción de la mesada que pudiese corresponder a la cónyuge y compañera permanente, deber que omitió dentro del trámite administrativo y que eludió hasta noviembre de 2017 pese a que se impuso desde el auto admisorio de la demanda en marzo de 2008 (fls. 14/15), así se deja ver de los reportes que obran a folios 87/105 y 321/330 que describe los pagos realizados a los beneficiarios entre marzo de 2007 y noviembre de 2017.

Se destaca que, no obstante que Mary Luz Montoya Upegui recibió un porcentaje de la mesada pensional en nombre de su hijo Jorge Eliecer Montoya, ello no compensa de forma alguna las mesadas que se le adeudan, toda vez que aquellas fueron reconocidas como pago del derecho en favor del joven Jorge Eliecer y no han de imputarse a la satisfacción de una obligación ajena. Aunado a ello se reitera que Colpensiones fue advertida de la necesidad de suspender el pago de la prestación, exhortación que omitió hasta noviembre de 2017, esto es por más de 9 años, por tanto, no puede alegar su propia desidia para abstenerse de cancelar las mesadas pensionales a aquellos que legítimamente tienen derecho a ello.

De ahí que se condenará al reconocimiento y pago de la pensión en proporción del 50% desde el fallecimiento del afiliado – 14 de septiembre de 2005, sin que ninguna de la

mesada se halle afectada por la prescripción extintiva, toda vez que con la reclamación elevada el 8 de marzo de 2006 se interrumpió el término trienal de que trata el artículo 151 del C.P.T.S.S, lapso que tampoco corrió entre la respuesta emitida en la resolución 5818 de marzo 20 de 2007 y la presentación de la acción judicial el 7 de noviembre de 2008 (fl. 4)

Se destaca que la orden de pago de la mesada pensional será en proporción del 50% hasta tanto se extinga de forma total el derecho de los actuales beneficiarios, teniendo presente Gisela y Jorge Eliecer Córdoba Montoya se encuentran dentro del rango de edad que los hace beneficiarios de la prestación en el evento que demuestren la calidad de estudiantes, la que no fue probada por las partes en este trámite , como tampoco se demostró que el pago se hubiere suspendido en favor de todos los demandantes, ora para declarar que Colpensiones a honrado sus deberes como administradora de pensiones, ora por parte de la accionante Mary Luz Montoya Upegui para declarar por esta vía el acrecimiento pensional, por lo que no es posible para esta corporación ordenar el pago al 100% en favor de la demandante Montoya Upegui.

Calculado el retroactivo pensional con base en la mesada reconocida en la resolución 5818 de 2007, causada entre el 14 de septiembre de 2005 y el 31 de agosto de 2020 a razón de 14 mesadas anuales, (ya que cumple con las premisas del párrafo transitorio 6 del acto legislativo 01 de 2005 al causarse antes del 31 de julio de 2011 y ser inferior a 3 veces el SMLMV) asciende a **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$ 85'250.768)**, suma de la cual se autoriza descontar los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud.

Año	Variación IPC	Mesada 100%	Mesada 50%	Nº mesadas	Sub total
2005	4,85%	\$ 578.578	\$ 289.289	4,53	\$ 1.310.479
2006	4,48%	\$ 606.639	\$ 303.320	14	\$ 4.246.473
2007	5,69%	\$ 633.816	\$ 316.908	14	\$ 4.436.715
2008	7,67%	\$ 669.881	\$ 334.940	14	\$ 4.689.164
2009	2,00%	\$ 721.260	\$ 360.630	14	\$ 5.048.823
2010	3,17%	\$ 735.686	\$ 367.843	14	\$ 5.149.800
2011	3,73%	\$ 759.007	\$ 379.503	14	\$ 5.313.048

Año	Variación IPC	Mesada 100%	Mesada 50%	N° mesadas	Sub total
2012	2,44%	\$ 787.318	\$ 393.659	14	\$ 5.511.225
2013	1,94%	\$ 806.528	\$ 403.264	14	\$ 5.645.699
2014	3,66%	\$ 822.175	\$ 411.088	14	\$ 5.755.226
2015	6,77%	\$ 852.267	\$ 426.133	14	\$ 5.965.867
2016	5,75%	\$ 909.965	\$ 454.983	14	\$ 6.369.756
2017	4,09%	\$ 962.288	\$ 481.144	14	\$ 6.736.017
2018	3,18%	\$ 1.001.646	\$ 500.823	14	\$ 7.011.520
2019	3,80%	\$ 1.033.498	\$ 516.749	14	\$ 7.234.486
2020		\$ 1.072.771	\$ 536.385	9	\$ 4.827.465
TOTAL					\$ 85.250.768

A partir del 1° de septiembre de 2020 la accionada seguirá reconociendo la mesada en cuantía de \$536.385 a razón de 14 mesadas, sin perjuicio del acrecimiento de la prestación al 100% una vez se extinga el derecho para los demás beneficiarios.

No habrá lugar al reconocimiento de intereses de mora, ya que la reclamación elevada por la actora en el año 2006 no estuvo soportada en prueba suficiente que permitiera establecer de forma diáfana su derecho pensional, siendo necesario agotar el trámite judicial para establecerlo. En su lugar y para resarcir los efectos nocivos de la pérdida del poder adquisitivo, se ordenará el pago con la debida indexación, aplicando a cada mesada la variación del IPC vigente al momento del pago.

En los términos expuestos quedan resueltos los temas de apelación y de revisión en el grado de consulta, siendo despachadas desfavorablemente las excepciones propuestas por los accionados.

Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada Colpensiones. En esta se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, REVOCA** de forma total la sentencia de primera instancia, en su lugar se declara:

PRIMERO: Mary Luz Montoya Upegui es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su compañero permanente Sergio León Córdoba Cataño, prestación que corresponde al 50% de la mesada que fuera reconocida en la resolución 5818 del 20 de marzo de 2007 emanada del extinto Instituto de Seguros Sociales.

SEGUNDO: calculada la prestación causada entre el 14 de septiembre de 2005 y el 31 de agosto de 2020 asciende a **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$ 85'250.768)**, suma de la cual se autoriza descontar los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud y que será pagada con la debida indexación a efectos de compensar los efectos nocivos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

A partir del 1° de septiembre de 2020 la accionada seguirá reconociendo la mesada en cuantía de \$536.385 a razón de 14 mesadas, sin perjuicio del acrecimiento de la prestación al 100% una vez se extinga el derecho para los demás beneficiarios, como se indicó en la parte motiva

Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada. En esta se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV.

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

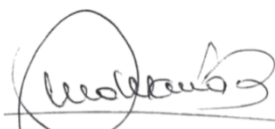
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por ESTADOS No. 139 fijados hoy en la secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín a las 8 a.m. Medellín, septiembre 24 de 2020